

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, por sentencia de treinta de septiembre de dos mil veintidós, en los antecedentes RUC 1.900.571.226-5, RIT 96-2022, condenó a Nubia Edith San Martín Pavez, a la pena única de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias legales, en su calidad de autora de ciento veintinueve delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano. Asimismo, fue condenada a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo y a las accesorias legales, en calidad de autora de treinta y tres delitos consumados de falsificación de instrumento público, en carácter de reiterados, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano.

También, condenó a Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya, a la pena única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias legales, en calidad de autor de treinta y cinco delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano. Adicionalmente, condenó a Pedro Nolasco Ravanal Mellado, a la pena única de seis años de presidio mayor en su grado mínimo y a las accesorias legales, en calidad de autor de ochenta y seis delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano.



En contra de dicho fallo, las defensas de los sentenciados dedujeron sendos recursos de nulidad, los cuales se conocieron en la audiencia pública de nueve de mayo del año en curso, oportunidad en la cual la defensa de los sentenciados San Martín y Ravanal incorporó la prueba de audio, ofrecida y aceptada por este Tribunal, convocándose a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

Considerando:

Primero: Que, la defensa de San Martín y Ravanal, de manera principal, postula en su arbitrio la causal contenida en el literal a), del artículo 373 del código adjetivo, denunciando como infringido el principio de legalidad, como garantía fundamental. Argumenta que la infracción se produce en el pronunciamiento mismo de la sentencia, puesto que los sentenciadores aplicaron, de una manera que califica como extensiva, el tipo para el delito malversación de caudales públicos, contemplado en el artículo 233 del Código Penal, cuya descripción contiene, como sujeto activo, a un empleado público que tiene a su cargo fondos o efectos públicos. Respecto del acusado Ravanal Mellado, el tipo penal descrito no resulta aplicable pues no reviste la calidad de funcionario público, siendo un “extraneus”, razón por la cual pide anular el juicio oral y la sentencia, disponiendo la realización de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado.

Como primera causal subsidiaria, invoca el motivo absoluto de invalidación previsto en la letra e), del artículo 374 del Código Procesal Penal, denunciando que la fundamentación proporcionada por el juzgador de fondo, contrariaría el texto expreso del artículo 297 del Código Procesal Penal. Expone que, la sentencia de autos, dio por establecida la circunstancia agravante de



responsabilidad del artículo 260 ter del Código Penal, sin embargo los sentenciadores del fondo no se hicieron cargo, en parte alguna, de las alegaciones efectuadas por la defensa, sino que más bien desarrollaron las diferencias que existen entre la organización criminal y la asociación ilícita, cuestión que no ha sido planteada ni discutida en el juicio, sin explicar en parte alguna las diferencias entre coautoría y organización criminal, como si la reiteración de delitos aislados en el tiempo, independientes unos de otros, fueran razón suficiente para descartar la coautoría y dar por sentada la agravante del artículo 260 ter del código de castigo.

Como segunda causal de invalidación subsidiaria, propone el motivo absoluto de nulidad contenido en el literal c), del artículo 374 del código adjetivo, sosteniendo que, en el caso sublite y tal como da cuenta el registro de audio respectivo, una vez iniciada la intervención de la defensa, durante la audiencia establecida en el inciso final del artículo 343 del mismo cuerpo legal, respecto de las circunstancias modificatorias ajenas al hecho punible y, en particular, a factores relevantes para la determinación de la misma, como es el caso del concurso medial del artículo 75 del Código Penal, al momento de comenzar sus alegaciones en orden al concurso medial y a la solicitud de pena en base a dicho factor, se le impidió continuar, argumentando que el tribunal ya se había pronunciado al respecto, señalando en el veredicto que se condenaba de manera separada por los delitos de malversación de caudales públicos y de falsificación de instrumento público, ya que para el tribunal no existía concurso medial. Argumenta que la circunstancia de existir dos delitos no excluye la posibilidad de discusión sobre el artículo 75 del Código Penal.



En subsidio de lo anterior, propone la causal de nulidad preceptuada en la letra b), del artículo 373 del Código Procesal Penal, en lo que respecta, en primer lugar, a la aplicación de la circunstancia agravante especial del artículo 260 ter del Código Penal. De la lectura del libelo acusatorio, se advierte una primera parte introductoria a los hechos propiamente tal y que da cuenta de lo siguiente. En los tres primeros párrafos se establece cuáles eran las funciones que desarrollaban tres de los cuatro acusados, principalmente en la Dirección de Administración de Salud Municipal. El párrafo cuarto de la mencionada acusación da cuenta de las circunstancias que los cuatro acusados se concertaron para la ejecución del delito para sustraer distintas sumas de dinero de la I. Municipalidad de Talcahuano a través del giro y cobro de diversos cheques que se individualizarán, abusando todos de sus cargos y funciones públicas en su caso.

La descripción fáctica recién referida no da cuenta, por si sola —ni de su detallada lectura— de estar ante una descripción de conducta que pueda configurar la agravante del artículo 260 ter del Código Penal. Muy por el contrario, si se lee la primera parte de la acusación podría sostenerse que los hechos expuestos no configuran una descripción de coautoría. De su lectura, no se avizora de qué manera dicha descripción de conducta de los acusados podría constituir una organización criminal, que fuese más allá de la sola reiteración en el tiempo de conductas típicas, sino que requiere cierta estructura en cuanto a la organización, no al nivel de la asociación ilícita, pero tampoco basta para establecerla la sola reiteración de hechos individuales en el tiempo, considerando además que la acusación tampoco da cuentas, de conductas previas de



preparación o algún elemento que permita sostener que estamos ante una estructura organizacional.

Si bien los sentenciadores hacen una distinción entre asociación ilícita y organización para establecer la agravante, no se ocupan de lo más importante y que les lleva a una aplicación errónea de la norma, cual es la distinción o diferencia entre la coautoría, de acuerdo a los conceptos ya dichos por doctrina y jurisprudencia —pluralidad de sujetos activos, con distintas funciones que contribuyen a la ejecución del delito dentro de un periodo de tiempo—. Por otro lado la circunstancia que los hechos se hayan reiterado una y otra vez en el tiempo por parte de estos sujetos, tampoco es un elemento diferenciador en relación con la coautoría, toda vez que si sostuviéramos lo contrario, cada vez que dos o más personas delinquen, con reiteración de delitos, estaríamos necesariamente ante una organización criminal, cuestión que evidentemente no se sostiene en base a la opinión de los autores y jurisprudencia.

En segundo lugar, respecto de la aplicación del artículo 233 del mismo cuerpo legal. La sentencia de autos, condena a Ravanal Mellado, en calidad de autor del artículo 15, N° 3 del delito contemplado en el artículo 233, N° 3 del Código Penal, quien no es funcionario público. Al haber realizado los sentenciadores una correcta aplicación del artículo 233, N° 3 del Código Penal, al acusado no hubiera sido condenado en los hechos materia de la acusación.

Por lo anterior, solicita respecto de las primeras dos causales subsidiarias, invalidar la sentencia y el juicio, y se disponga la realización de un nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado. En relación a la tercera causal subsidiaria, respecto del primer error de derecho, se dicte sentencia de reemplazo que no de



aplicación a la agravante del artículo 260 ter, rebajando la pena en un grado, solicitando el quantum de tres años y un día de presidio mayor en su grado máximo respecto del delito de malversación de caudales públicos. En lo que atañe al segundo error de derecho denunciado, que se absuelva a Ravanal Mellado del cargo formulado como autor de delito de malversación de caudales públicos.

Segundo: Que, en lo tocante al recurso de nulidad postulado por la defensa de Paredes Montoya, de manera principal, también invoca la causal de invalidación contenida en el artículo 373, letra a) del código adjetivo, en relación al principio de legalidad, por haberse aplicado el 233 del código punitivo a su defendido.

De manera subsidiaria, de aquel modo se funda en la causal de nulidad preceptuada en el 373, letra b) del Código Procesal Penal por la aplicación del artículo 233 del código punitivo y, asimismo, por la determinación de concurrir a su respecto, la circunstancia agravante especial del 260 ter del código de castigo.

Por ambas causales pide invalidar solo sentencia y se dicte sentencia de reemplazo, que lo condene únicamente como autor de los delitos de hurto simple respecto del hecho N° 2.

Tercero: Que, la sentencia impugnada, en su motivo trigésimo séptimo, tuvo por acreditado que, *“...entre los meses de octubre de 2017 a marzo de 2019, la Dirección de Administración de Salud Municipal de Talcahuano, en adelante DAS, comuna, el imputado Alejandro David Cabello Bustos se desempeñaba como funcionario de la Municipalidad de Talcahuano, específicamente como Jefe del Departamento de Finanzas, encargado, entre otras funciones, de controlar el presupuesto, asesorar en el cumplimiento de las funciones de administrar*



presupuesto y convenios, supervisar y encargarse de las transferencias entre cuentas corrientes y velar por el correcto funcionamiento del presupuesto de la DAS.

En el mismo departamento de finanzas, dentro de igual periodo, la imputada Nubia San Martín Pavez, funcionaria de la misma Municipalidad, ejercía la labor Encargada de Presupuesto, y entre sus funciones se encontraban las de ingreso de registros contables, revisión de documentos de respaldo para pagos, registro de obligaciones, devengamiento y ajustes contables, pago de proveedores, y atención de proveedores. Además tenía a su cargo la caja chica y era una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En la misma época, el imputado Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya, se desempeñaba como funcionario de la DAS de Talcahuano, como encargado de proyectos; y dentro del mismo periodo, Manuel Andrés Rojas Ramírez, se desempeñaba como funcionario municipal en el departamento de Abastecimiento de la DAS de Talcahuano y, entre otras funciones, le correspondía ser una de las firmas autorizadas para girar cheques desde las cuentas corrientes de titularidad de la Municipalidad de Talcahuano.

En el periodo señalado, en la comuna de Talcahuano, los imputados Cabello Bustos, Paredes Montoya, San Martín Pavez y Ravanal Mellado se concertaron para sustraer distintas sumas de dinero de la Municipalidad de Talcahuano a través del giro y cobro de diversos cheques que se individualizarán, abusando todos de sus cargos y funciones públicas en su caso.



Para sustraer fondos municipales, los imputados obraron de la siguiente forma:

HECHO N° 1:

Dentro del periodo señalado el imputado Alejandro David Cabello Bustos quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió, estando previamente concertado con la imputada Nubia San Martín Pavez quien, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161 y N° 52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, giró y suscribió 7 cheques a su nombre para luego cobrarlos por caja sustrayendo la suma total de \$ 17.898.643 equivalente a 377,04 UTM, repartiéndose entre ambos, los montos sustraídos.

Los imputados Cabello Bustos y San Martín Pavez, registraron el cheque como pagadero de obligaciones contraídas por la DAS con proveedores, lo cual concretaron mediante el registro por San Martín Pavez del cheque en el respectivo instrumento público Decreto de Pago, que luego era suscrito por el imputado Cabello Bustos autorizando el pago. Luego, ingresaban el pago en el Sistema Modular Contable en adelante SMC quedando pagada contablemente pero en realidad estas obligaciones quedaban pendiente de pago para la Municipalidad.

Estos cheques fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos...



HECHO N°2:

Dentro del periodo señalado el imputado Alejandro David Cabello Bustos quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, y teniendo a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada Nubia San Martín Pavez, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de las cuentas corrientes N° 52709052161 y N°52709052004 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 35 cheques a nombre del imputado Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya, quien, concertado también con los imputados Cabello Bustos y San Martín Pavez los cobró por caja, sustrayendo la suma total de \$111.176.748 equivalentes a 2.339,69 UTM según el valor de la época, repartiéndose luego entre los coimputados los montos sustraídos.

Estos cheques fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos...

HECHO N° 3:

El 05 de septiembre del 2018 el imputado Alejandro David Cabello Bustos, quien en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano tenía a su cargo los fondos municipales, permitió que la imputada Nubia San Martín Pavez, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de una de las firmas habilitadas de la cuentas corriente N° 52709052161 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara el cheque N°



1344003 a nombre del Alejandro David Cabello Bustos, quien posteriormente procedió a cobrarlo por caja el 06 de septiembre del mismo año, sustrayendo así la suma de \$ 3.476.847 correspondientes a 72,56 UTM.

Estos cheques fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos.

HECHO N°4:

Dentro del periodo señalado el imputado Alejandro David Cabello Bustos quien, en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano, tenía a su cargo los fondos municipales permitió que la imputada Nubia San Martín Pavez, con quien estaba previamente concertado, en su calidad de funcionaria del Departamento de Finanzas de la DAS y titular de las firmas habilitadas de las cuentas corriente N° 52709052161, N°52709052004, N°52709052187 y N° 52709052179 del Banco Estado de la referida Municipalidad, girara y suscribiera 86 cheques a nombre del imputado Pedro Ravanal Mellado, quien, concertado también con los imputados Cabello Bustos y San Martín Pavez y a sabiendas de las calidades de funcionarios públicos desempeñados por estos, los cobró por caja, permitiendo la sustracción de la suma total de \$279.472.587 equivalente a 5.854,99 UTM repartiéndose entre los coimputados, los montas sustraídos.

Todos los cheques, salvo N° 620362 y N° 620383 de la cuenta corriente N° 52709052161 de los número 36 y 37 del listado, fueron suscritos además por Manuel Rojas Ramírez, quien tenía otra de las firmas habilitadas, el cual infringió labores propias de su cargo, dando ocasión a que los fondos fueran sustraídos...



HECHO N° 5:

Entre los meses de diciembre del 2017 a octubre del 2018 el imputado Alejandro Cabello Bustos en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, firmó los decretos respecto de pagos a distintos proveedores en las fechas, montos y con los cheques que se indicarán, a sabiendas que los cheques consignados no pagaron las obligaciones declaradas en los documentos; decretos de pago que fueron elaborados concertadamente con Cabello Bustos, por la imputada Nubia San Martín Pavez, en su calidad de Encargada de Presupuesto, quien ingresa la información contenida en los decretos y luego visa con firma de responsabilidad los mismos. Estos decretos son falsos al declarar que las respectivas obligaciones en ellos consignadas fueron pagadas con los cheques de titularidad de la Municipalidad señalados en los documentos...

HECHO N° 6:

El 12 de junio del 2018 el imputado Alejandro Cabello Bustos en su calidad de jefe del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargado de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 1013 respecto del pago al proveedor LABORATORIO ANDROMACO declarando que el cheque N° 620368 pagaba dicha obligación por \$3.560.480 para luego firmarlo. Decreto de pago que Cabello Bustos firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva



obligación en el decreto consignada, fue pagado con el cheque de titularidad de la Municipalidad señalado en el documento, lo cual es falso.

HECHO N° 7:

El 01 de febrero del 2019 la imputada Nubia San Martín Pavez en su calidad de jefa subrogante del departamento de Finanzas de la DAS de Municipalidad de Talcahuano y encargada de suscribir los decretos municipales que registran los pagos de obligaciones contraídas por la DAS de dicha Municipalidad, elaboró e ingresó la información contenida en el decreto de pago N° 235 respecto del pago al proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION, declarando que el cheque N° 1344113 pagaba dicha obligación por \$3.513.753 para luego firmarlo. Decreto de pago que San Martín Pavez firma a sabiendas de su falsedad al declarar que la respectiva obligación en el decreto consignada fue pagado con el cheque de titularidad de la Municipalidad señalado en el documento, lo cual es falso”.

Lo anterior fue calificado por los sentenciadores en relación a los hechos 1, 2, 3 y 4, como constitutivos de 129 delitos de malversación de caudales público, previstos y sancionados en el artículo 233, N° 2 y 3 del Código Penal. En cuanto a los hechos 5, 6 y 7, se estimaron como constitutivos de 35 delitos de falsificación de instrumento público, previsto y sancionado en el artículo 193, N° 4 del Código Penal.

Ahora, en relación a los puntos abordados en los recursos de nulidad, el fallo señaló en la motivación cuadragésima que, “...respecto de los acusados Ravanal Mellado, quien no reviste la calidad de empleado público, y Paredes Montoya, que a pesar de ser empleado público, no tenía caudales públicos a su



cargo, se dan todos los presupuestos doctrinarios y jurisprudenciales precedentemente expuestos para comunicarles a su respecto las calidades especiales de funcionarios públicos de Cabello Bustos y San Martín Pavez y de la circunstancia que dentro de sus funciones se encuentra el cuidado de caudales o efectos públicos; dado que aquéllos estaban en pleno conocimiento de dichas calidades especiales y de que tenían a su cargo caudales públicos, lo cual queda en total evidencia, por el hecho de ser Ravanal Mellado la pareja de San Martín Pavez, ya por 35 años, según lo manifestó en la audiencia, lo que evidentemente implica que sabe donde trabaja y que funciones cumple, a quien por lo demás en muchas ocasiones lo vieron en la municipalidad en compañía de aquélla, por lo que concurría a su lugar de trabajo, habiendo el propio Ravanal Mellado, señalado en audiencia que sabe que Nubia trabajaba en la municipalidad en el departamento de Finanzas, el cargo que tiene, pero no el detalle de lo que hace, mas, señala que sabe que tenía que girar cheques para pagar y que tenía chequeras a su cargo, agregando que también sabía que su jefe era Alejandro Cabello, como también sabía que Paredes Montoya anteriormente había sido jefe de Nubia. Y en relación a Paredes Montoya, por ser funcionario de la misma municipalidad, esto es, compañero de trabajo de los acusados, quien por lo demás años anteriores había desempeñado también el cargo de jefe de finanzas, quien al respecto manifestó que por ello sabe cuáles son las obligaciones que tiene un jefe de finanzas, que las conoce, una de las cuales era tener a cargo los fondos públicos, y que sabe cuáles eran las funciones desempeñadas por San Martín, y por lo mismo, sabe que estaba a cargo del manejo de las cuentas corrientes de la DAS y de otros departamentos que indica.



Por lo anterior, ambos acusados estaban en conocimiento de las funciones desplegadas por los encartados Cabello y San Martín, como asimismo del carácter o naturaleza pública de los fondos a cuyo cargo se encontraban, los cuales cobraron a través de los cheques girados nominativamente a sus personas, en los cuales se sindicaba expresamente que la cuenta corriente a la que pertenecían correspondía a la Municipalidad de Talcahuano; por lo que al accionar Ravanal Mellado y Paredes Montoya, estaban en total conocimiento de todos y cada uno de los elementos que configuran el delito de malversación de caudales públicos, accionar que estos sentenciadores estiman ser constitutivo de una cooperación concertada con los sujetos activos cualificados; por cuanto concertadamente prestaron su concurso para la materialización de la sustracción de los caudales públicos, facilitando los medios para la ejecución de la malversación de caudales públicos llevada a efecto; lo cual implica que tuvieron una participación en calidad de cómplices, partícipes a quienes nuestro código punitivo, en atención al concierto previo existente, en el artículo 15 N° 3 les ha dado el mismo tratamiento de los autores, lo cual descarta la aplicación del artículo 16 solicitada por las defensas”.

Por su parte, la motivación quincuagésima tercera estableció que, “...en los delitos de malversación de caudales públicos, perjudica a los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez, Paredes Montoya y Ravanal Mellado la circunstancia agravante del artículo 260 ter del Código Penal, por cuanto se acreditó que los referidos encartados actuaron formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer los delitos de malversación de caudales público, sin que dicha organización constituya una asociación ilícita de



que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo; agravante que afecta a los acusados respecto de los hechos cometidos con posterioridad al 20 de noviembre de 2018, esto es, respecto de los consignados en los numerales 29 a 35 del Hecho 2, y de los numerales 72 a 86 del Hecho 4 de las acusaciones fiscal y particular.

En efecto, la prueba rendida permitió establecer que en los respectivos delitos los acusados actuaron organizados bajo una cierta estructura, en la cual había una distribución de funciones tendiente a materializar el objetivo común que era la sustracción de los fondos públicos pertenecientes a la DAS de Talcahuano, en la cual San Martín Pavez era quien confeccionaba y firmaba los cheques a nombre de los demás acusados, e incluso a nombre propio, aprovechándose de la existencia de cheques firmados en blanco por el funcionario Manuel Rojas, quien tenía la segunda firma autorizada; y los acusados Paredes Montoya y Ravanal Mellado, eran quienes cobraban los documentos y posteriormente entregaban el dinero en efectivo obtenido por dicha acción para su reparto entre los encartados; en tanto que Cabello Bustos, además de haber cobrado un cheque a su nombre, en su calidad de jefe del departamento de finanzas, y por lo tanto, la persona encargada del controlar el presupuesto, y supervisar y encargarse de las transferencias entre cuentas Código: corrientes, y velar por el correcto funcionamiento de las cuentas de la Dirección de Salud, y teniendo a su cargo los fondos municipales de dicha Dirección, permitía el giro de tales cheques, de cuyo producto igualmente se beneficiaba; por lo que se encontraba claramente establecida una división de funciones, que tenía por objeto materializar la sustracción de los fondos públicos de la DAS de los cuales se



encontraban a cargo Cabello Bustos y San Martín Pavez, quienes por lo mismo, eran los que principalmente llevaban adelante tal maquinación, en conjunto con los otros dos acusados.

Que no obstante lo referido precedentemente, en la referida agrupación no es posible establecer una clara jerarquía o nivel de mando, que pudiese constituir a su respecto una asociación ilícita, por cuanto no obstante que Cabello Bustos era el jefe del departamento de finanzas, el mérito de la prueba no permite dar por acreditado que él desempeñare la calidad de jefe o mando superior de la agrupación, ni tampoco la acusada San Martín Pavez, a pesar de su calidad de firma autorizada y de tener bajo su custodia los talonarios de cheques; sin perjuicio que por la naturaleza de sus cargos y funciones al interior del departamento de finanzas, la intervención de ellos naturalmente era relevante; más aun considerando lo señalado por la propia encartada San Martín Pavez, en orden a que la decisión de girar algún cheque la tomaban los tres – refiriéndose a ella, Cabello y Paredes-, porque los tres tenían problemas económicos, que cualquiera podía tomar la decisión porque estaban siempre de acuerdo los tres, precisando que en relación al nombre a quien se giraba el cheque, se hacía a nombre del que tuviera más tiempo para ir a cobrar el documento; lo que revela la falta de una jerarquía al interior de la agrupación en cuestión, más aún si uno de los acusados, ni siquiera trabajaba en la entidad edilicia; dinero que posteriormente era repartido entre todos los acusados; sin que se haya establecido fehacientemente alguna repartición especial, más allá de haberse indicado por los acusados que la repartición era por partes iguales.



Que a efectos de diferenciar cuándo una agrupación u organización de dos o más personas configura la agravante en cuestión y cuando una organización constituye una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo, es posible hacer aplicación de lo sostenido por la doctrina en relación a la misma cuestión que se plantea entre la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000 y el delito de asociación ilícita establecido en el artículo 16 de la misma ley; a cuyo respecto se sostiene que para estar frente a la agravante debe carecer de jerarquización y organización propios de la asociación ilícita, como jefes y reglas propias (“Sergio Politoff L., Jean Pierre Matus A., María Cecilia Ramírez G., “Lecciones de Derecho Penal Chileno” Parte Especial, Segunda Edición actualizada, página 614); argumento que cobra fuerza si se considera que el delito de asociación ilícita de que tratan los artículos 292 y siguientes del Código Penal, al penalizar las conductas, precisamente tiene en consideración si se tuvo parte o no en el ejercicio del mando de la organización.

Así, en definitiva, fue posible establecer, más allá de toda duda razonable, que los acusados formaron una agrupación destinada a cometer los delitos de malversación de caudales público, esto es, se concertaron para sustraer fondos de la Dirección de Administración de Salud de la Municipalidad de Talcahuano, aprovechándose el acusado Cabello Bustos y San Martín Pavez de la circunstancia de tener a su cargo dichos fondos públicos, y la acusada San Martín Pavez, además, de las funciones que desempeñaba como encargada de presupuesto de dicha Dirección, y particularmente del hecho de ser una de las firmas autorizadas para girar cheques; todo ello junto a los acusados Paredes Montoya y Ravanal Mellado, cuya función era la de cobrar los cheques que eran



girados a su nombre, agrupación que tuvo una cierta permanencia en el tiempo, que por lo mismo va más allá de la simple coparticipación argumentada por la defensa; sin que exista una clara jerarquía, jefes, centros o mandos de poder al interior de dicha agrupación u organización.

Por lo anteriormente expuesto, se desestiman las alegaciones de las defensas, en orden a que no se configura la referida agravante, y en particular por el hecho que no se encontraría descrita fácticamente en los hechos de la acusación, como lo sostiene la defensa de los acusados Cabello Bustos, San Martín Pavez y Ravanal Mellado, dado que la acusación es un todo, y precisamente los aspectos que el señor defensor echa de menos, se encuentran comprendidos en la primera parte de las acusaciones fiscal y particular, que sirven de preámbulo y de contexto en el cual se cometen de manera específica los hechos que luego se detallan, como Hechos 1 a 7, y por lo mismo se encuentran descritos los presupuestos fácticos a partir de los cuales es posible configurar y dar por establecida la agravante del artículo 260 ter del Código Penal, de la manera que se ha expuesto.

De igual manera se rechazan las alegaciones en torno a que no se configura la agravante por el hecho que en definitiva el reparto de los dineros producto del cobro de cheques hubiere sido en partes iguales, y que ello no se condice con la existencia de jefes y jerarquías, por cuanto desde ya debe indicarse que si bien los acusados dieron cuenta que los dineros se habrían repartido en partes iguales, ello no necesariamente ha quedado debidamente acreditado, habida consideración que entre los mismos acusados también hubo cambios de versiones en cuanto a la forma que se repartían el dinero; y por lo



demás, aun cuando la distribución hubiere sido en partes iguales, ello no tiene mayor influencia en los elementos que configuran la agravante en cuestión, y porque tampoco se estableció la existencia de jerarquías al interior de la agrupación, todo ello conforme a lo ya razonado”.

Cuarto: Que, en lo que respecta a la causal de invalidación propuesta a título principal por ambos recursos, lo que se cuestiona a través de ellos no es una infracción sustancial de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, verificado en cualquier etapa del procedimiento o en el pronunciamiento de la sentencia. Lo que se propugna a través de los referidos capítulos es una aplicación —que se califica de incorrecta— del artículo 233 del código punitivo, en lo que atañe a los acusados Ravanal Mellado y Paredes Montoya, sin embargo la errónea aplicación del derecho con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo se encuentra reservada, como causal, en el literal b), del artículo 373 del código adjetivo.

Lo anterior se evidencia de los propios recursos de nulidad impetrados pues, los reproches postulados a título principal son, nuevamente invocados de manera subsidiaria a través de la causal de invalidación idónea para tales efectos, no bastando que se argumente una inobservancia al principio de legalidad como garantía constitucional supuestamente amagada, pues lo postulado es un tema de interpretación jurídica, de forma tal que las causales en estudio no podrán prosperar por improcedentes.

Quinto: Que, en lo referente a la primera causal de invalidación subsidiaria propuesta por la defensa de los sentenciados San Martín Pavez y Ravanal



Mellado, el arbitrio esgrime la causal contemplada en el artículo 374, letra e) en relación al artículo 342, letra c), ambos del Código Procesal Penal, atendido que los sentenciadores no expresaron las razones para descartar las alegaciones de la defensa en torno a la inexistencia de la organización o estructura criminal, en relación al artículo 297 del mismo cuerpo legal, para efectos de desestimar la concurrencia de la agravante especial del artículo 260 ter del código de castigo.

Sin embargo, de la atenta lectura de lo expresado por los sentenciadores del fondo, el fundamento quincuagésimo tercero, luego de analizar la concurrencia de la agravante en estudio, se pronuncia expresamente descartando las alegaciones de la defensa al respecto. Lo que se reprocha, entonces, aparece como un cuestionamiento al razonamiento empleado por el tribunal para descartar la concurrencia de la agravante descrita, lo que resulta inatacable en virtud de la causal propuesta, en los términos expuestos.

A mayor abundamiento, el eventual vicio denunciado carece de trascendencia para los efectos de la regulación del quantum de las penas impuestas a cada uno de los acusados, dada la concurrencia de otras circunstancias minorantes de responsabilidad penal y el castigo de los diversos ilícitos en los términos del artículo 351 del código adjetivo, a través del cual el tribunal pudo haber aumentado hasta en dos grados las penas a imponer, razón por la cual la causal en estudio no podrá ser acogida. Huelga recordar que, de la atenta lectura del recurso de marras en el capítulo en estudio, doctrinariamente lo sostenido por la articulista en torno al perjuicio se ha construido no con ocasión de un motivo absoluto de nulidad, sino que se ha cimentado sobre la infracción de



garantías constitucionales, causal que corresponde al literal a), del artículo 373 del código adjetivo mas no de aquel propuesto en este apartado.

Sexto: Que, en lo que guarda relación con la segunda causal de invalidación postulada a título subsidiario, en torno a un eventual impedimento para que la defensa de los acusados pudiese exponer, en la audiencia establecida en el inciso final del artículo 343 del código adjetivo, sus argumentos en torno a una supuesta hipótesis de concurso medial entre los delitos de malversación de caudales públicos y de falsificación de instrumento público y, con ello, sancionarlos de acuerdo al artículo 75 del código de castigo, ello no resulta atendible toda vez que, al momento de pronunciar el veredicto, el tribunal estableció la existencia de tales delitos, claramente diferenciados e independientes entre sí. Huelga señalar que tal hipótesis fue discutida durante el juicio, dada la calificación de los delitos propuesta por la acusadora particular.

Asimismo, la audiencia contemplada en el inciso final del artículo 343 del código adjetivo tiene por única finalidad el abrir debate entre los intervinientes sobre las circunstancias ajenas al hecho punible, y los demás factores relevantes para la determinación y cumplimiento de las penas, quedando vedado entrar a conocer de aspectos propios de los delitos investigados o su calificación jurídica, como pretendió la defensa, razón por la cual la causal en estudio no podrá prosperar.

Séptimo: Que, sobre la tercera causal subsidiaria promovida por la defensa de San Martín Pavez y Ravanal Mellado, sus planteamientos se escindirán y se analizarán de forma compartimentada con lo propuesto, también a título subsidiario por la defensa de Paredes Montoya.



En ambos recursos se cuestiona, en relación de todos los acusados, la aplicación de la circunstancia agravante contenida en el artículo 260 ter del código punitivo, sin embargo, como se expresó *ut supra*, el eventual vicio denunciado carece de influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, para los efectos de la regulación del quantum de las penas impuestas a cada uno de los encartados, dada la concurrencia de otras circunstancias minorantes de responsabilidad penal y el castigo de las diversos ilícitos en los términos del artículo 351 del código adjetivo. Aun en el evento de no considerar concurrente la citada circunstancia agravante de responsabilidad criminal, los sentenciadores pudieron haber arribado a la misma determinación de castigo o a otra, inclusive, superior, razón por la cual el capítulo en estudio no podrá ser admitido.

Octavo: Que, ahora, se analizará el siguiente aspecto de la causal en estudio, en lo que guarda relación con la comunicabilidad del tipo penal de malversación de caudales públicos, contenido en el artículo 233 del código punitivo.

Sobre Paredes Montoya, se argumenta que la referida norma no le resulta aplicable, escudando su desarrollo en que no mantenía a su cargo caudales o efectos públicos, en tanto que respecto de Ravanal Mellado, su defensa se articula sobre la base de carecer de la calidad de funcionario público a la época de los hechos.

Noveno: Que, el delito de malversación de caudales público, también conocido como peculado, consiste en la conducta del empleado público que, teniendo a su cargo caudales o efectos públicos o particulares en depósito, consignación o secuestro, los substraiga o consintiere que otro los substraiga.



Dos figuras contempla el artículo 233 del código de castigo con idéntica penalidad:

i) La sustracción para sí, que hace el empleado público; y ii) La participación del empleado en la sustracción que un tercero hace de esos fondos. Debe ser, en principio, un empleado público. La segunda modalidad del delito (consentir en la sustracción) permite obviar la discusión acerca del actuar del funcionario como autor mediato con agente doloso: se castiga con la pena del autor al empleado público que utiliza a otro que no posee tal calidad en la sustracción de los bienes a su cargo, porque evidentemente consiente en ella, siendo irrelevante el hecho de que tal sustracción se haga para entregar posteriormente dichos bienes al funcionario infiel en su custodia, o que el tercero se los quede para sí. Además, la norma del artículo 238 del Código Penal extiende la posibilidad de considerar autor de este delito a un particular, cuando se halle encargado por cualquier concepto de fondos municipales o pertenecientes a un establecimiento público de instrucción o beneficencia (Politoff, Sergio, et al. Lecciones de Derecho Penal Chileno, Parte Especial, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2ª ed., 2005, p 492).

Por su parte, la incomunicabilidad de la calidad funcionaria a los extraños que toman parte en el ilícito, se encuentra directamente vinculada a un tema controversial de la teoría de los delitos de índole patrimonial cometidos en perjuicio de la Administración Pública.

Si bien la doctrina y jurisprudencia nacionales hace ya mucho tiempo que se unificaron en torno a la incomunicabilidad del vínculo personal en el parricidio, debiendo responder el *extraneus* como culpable de homicidio, no ha sucedido igual cosa con ciertos delitos funcionarios, en especial, malversación de caudales públicos y fraude al Fisco. La disputa acerca de la comunicabilidad o



incomunicabilidad trae a colación el distingo entre delitos especiales propios e impropios. Tratándose de los primeros, en que la calidad personal concurrente en el sujeto activo es fundante del injusto y la ausencia de ella determina la atipicidad de la conducta ilícita, se afirma la comunicabilidad. En cambio, los delitos especiales impropios tienen la característica de que la cualidad personal sólo produce el efecto de agravar el título de la imputación, manteniéndose la punibilidad del comportamiento aún en el evento de no concurrir el factor personal (no parricidio, pero homicidio; no malversación, pero hurto; no fraude al Fisco, pero estafa).

En las recientes decisiones de esta Sala Penal, se coincide plenamente con aquellas precisiones doctrinarias, concluyendo que en ausencia de la calidad funcionaria, es aplicable a los *extraneus* la figura de hurto o estafa común, cuyo sujeto activo es un particular no obligado por deberes para con la administración (SCS Rol N°s 13.823-2014 de 16 de abril de 2015; 29.891-2014 de 8 de octubre de 2015; y, 59.856-2022, de 3 de mayo de 2023).

Décimo: Que, frente a lo argumentado, el fallo en estudio estableció que en lo que respecta a Paredes Montoya que, *“por ser funcionario de la misma municipalidad, esto es, compañero de trabajo de los acusados, quien por lo demás años anteriores había desempeñado también el cargo de jefe de finanzas, quien al respecto manifestó que por ello sabe cuáles son las obligaciones que tiene un jefe de finanzas, que las conoce, una de las cuales era tener a cargo los fondos públicos, y que sabe cuáles eran las funciones desempeñadas por San Martín, y por lo mismo, sabe que estaba a cargo del manejo de las cuentas corrientes de la DAS y de otros departamentos que indica”*. Es decir, constituye un



hecho irredargüible que dicho encartado era funcionario público de la I. Municipalidad de Talcahuano al momento en que se verificaron los hechos investigados, situación que no es tal respecto del acusado Ravanal Mellado, el cual no reviste tal calidad.

Undécimo: Que, existen estudios que, con gran profundidad, han abordado el tema de la comunicabilidad o incommunicabilidad en los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco (Francisco Grisolia, Revista de Ciencias Penales, 3a época, Enero-Junio 1975, N° 1, T.XXX), evidenciando que el artículo 64, inciso 1° del Código Penal resuelve negativamente el caso de los partícipes *extraneus* en los delitos de malversación y fraude al Fisco, en el sentido que el vínculo funcionario no se comunica al particular que co-delinque con el empleado público, toda vez que la calidad funcionaria es una circunstancia de carácter personal, que, al tenor del artículo 64 del Código Penal, sólo puede afectar a aquel en quien concurre.

Duodécimo: Que, entonces en lo que atañe a Paredes Montoya, el yerro atribuido a la sentencia en estudio no es tal puesto que, si bien no resulta ser el sujeto activo de la malversación misma, en los términos descritos en el 233 del código de castigo, al revestir el carácter de funcionario público, tal figura le resulta comunicable, en los términos concluidos por los sentenciadores del fondo, no pudiendo prosperar el recurso propuesto a su respecto.

Decimotercero: Que, distinto es el caso de Ravanal Mellado, pues el carácter de funcionario público es una circunstancia de carácter personal respecto al ilícito en estudio, no siendo procedente su castigo a través de la figura materia de la acusación, que solo resulta aplicable a aquel personal que revista dicha



calidad, debiendo entonces responder por el delito de hurto y no de malversación de caudales públicos, de concurrir en la especie los requisitos del ilícito común, por lo que cabe ahora discernir si es posible emitir una condena en este caso.

Al efecto, debe considerarse que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece que *“La sentencia condenatoria no podrá exceder el contenido de la acusación. En consecuencia, no se podrá condenar por hechos o circunstancias no contenidos en ella.*

Con todo, el tribunal podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta de aquella contenida en la acusación o apreciar la concurrencia de causales modificatorias agravantes de la responsabilidad penal no incluidas en ella, siempre que hubiere advertido a los intervinientes durante la audiencia.

Si durante la deliberación uno o más jueces consideraren la posibilidad de otorgar a los hechos una calificación distinta de la establecida en la acusación, que no hubiere sido objeto de discusión durante la audiencia, deberán reabrir la, a objeto de permitir a las partes debatir sobre ella”.

De la norma citada, nace la obligación para el tribunal de advertir a los intervinientes durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral o luego de la deliberación, de la posibilidad de realizar una calificación jurídica distinta de la propuesta en la acusación, lo que no aconteció en este caso, puesto que no existe constancia de este llamamiento, por lo que no se generó tampoco debate respecto de esta materia, en especial si concurrían los requisitos del delito en comento.

Decimocuarto: Que, al no haber cumplido con la exigencia de advertir a los intervinientes sobre la posibilidad de una calificación jurídica distinta durante el desarrollo del juicio o luego de la deliberación y con anterioridad al veredicto, no



puede dictarse una sentencia condenatoria, pues ello importaría afectar el derecho a defensa del imputado, lo que el legislador precisamente evita con la incorporación de este artículo 341 del Código Procesal Penal (Horvitz-López, Derecho Procesal Penal Chileno, tomo II, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2004, p. 342); máxime si no se debatió sobre la concurrencia de los requisitos del hurto.

Decimoquinto: Que, por lo razonado, se acogerá la tercera causal subsidiaria de nulidad propuesta por la defensa de Ravanal Mellado, únicamente a su respecto, al no tener el acusado la calidad de funcionario público, vicio con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo impugnado, defecto relativo sólo a la sentencia impugnada, mas no al juicio, toda vez que la causal esgrimida no se refiere a formalidades del pleito ni a los hechos y circunstancias que se hubieren dado por probados, sino que se aplicó una pena cuando no procedía aplicar pena alguna, asumiéndose a continuación la obligación de dictar sentencia de reemplazo.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo establecido en los artículos 372, 373 letras a) y b, 374 letras c) y e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, se decide:

I. Que se rechazan los recursos de nulidad deducidos en favor de los acusados de los acusados Nubia Edith San Martín Pavez y Pedro Eduardo Mauricio Paredes Montoya, en contra de la sentencia condenatoria de treinta de septiembre de dos mil veintidós, pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, en la causa RUC 1.900.571.226-5 y RIT 96-2022, y contra



el juicio oral que le antecedió, los que en consecuencia, **no son nulos** a su respecto.

II. Que **se acoge** el recurso de nulidad propuesto en favor del acusado Pedro Nolasco Ravanal Mellado, en contra de la referida sentencia, **invalidándose únicamente** en aquel capítulo que lo condenó en calidad de autor de ochenta y seis delitos consumados de malversación de caudales públicos, en calidad de reiterados, y se procederá a dictar a continuación, sin nueva vista, pero separadamente, la correspondiente **sentencia de reemplazo de forma parcial**.

Acordada la decisión de acoger el recurso de nulidad propuesto por la defensa del acusado Ravanal Mellado, con el voto en contra del ministro Sr. Dahm, quien fue de parecer de desestimarlos y mantener la condena dispuesta en el fallo que se revisa, toda vez que en opinión del disidente, la calidad de funcionario público únicamente resulta exigible para aquel partícipe que tenga la calidad de autor ejecutor, mas no respecto de la atribución de autoría prevista en el artículo 15, N° 3 del Código Penal que ha sido la hipótesis a través de la cual se le atribuyó responsabilidad.

Asimismo, el acusado Ravanal Mellado conocía las funciones que su pareja —Nubia San Martín— cumplía dentro del organismo público.

Y más aún, este se concertó con ella y los demás partícipes para defraudar a la Municipalidad de Talcahuano, de modo que si su pareja y los demás partícipes no ostentaran la calidad de funcionarios públicos autorizados para girar los cheques con que se defraudó al ente público, el delito no habría sido posible.

De esta manera se trata de una cooperación concertada para defraudar y Ravanal se vale de la función pública que tienen los demás partícipes para



concretar su delito, por lo que en este evento la comunicabilidad es evidente, para apropiarse, por su parte de la suma de \$279.4723.587.Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama y, del voto disidente, su autor.

Regístrese.

Nº 122.925-2022.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., la Ministra Suplente Sra. Dobra Lusic N., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Ricardo Abuaud D. No firma la Ministra Suplente Sra. Lusic y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 29/05/2023 11:35:07

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 29/05/2023 11:12:04

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 29/05/2023 11:29:26



En Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.



SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés.

En cumplimiento a lo ordenado por la decisión de nulidad que antecede y lo prescrito en el artículo 385 del Código Procesal Penal, se dicta la siguiente sentencia parcial de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce el fallo anulado, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, suprimiéndose del fundamento cuadragésimo, todas las referencias al análisis de la defensa del acusado Ravanal Mellado.

En el motivo quincuagésimo primero, se elimina la expresión “y Ravanal Mellado” y, entre los apellidos Pavez y Paredes, se intercala la conjunción “y”.

En los motivos cuadragésimo noveno y, quincuagésimo tercero, en sus párrafos primero y penúltimo párrafo, se eliminan la frases “y Ravanal Mellado” y entre los apellidos Bustos y San Martín, se intercala la conjunción “y”.

En el fundamento quincuagésimo quinto, se suprime el tercer párrafo del acápite “2.-”; en el último párrafo de apartado “5.-” se elimina la frase “Ravanal Mellado, 15 delitos;”; en el acápite “8.-” se eliminan las referencias al acusado Ravanal Mellado y a los delitos materia de la acusación a su respecto.

Del motivo sexagésimo cuarto, en su penúltimo párrafo se suprime la expresión “su participación penal”; en su párrafo final se elimina la expresión “delitos y”.

De la sentencia de nulidad que antecede, se reproducen los fundamentos octavo a decimocuarto.

Y se tiene en su lugar y además presente:

1º) Que, careciendo el acusado Ravanal Mellado de la calidad funcionario público, no resulta posible atribuirle responsabilidad a título de autor



del delito de malversación de caudales públicos. El delito contenido en el artículo 233 del código de castigo, en doctrina, es calificado como un delito impropio, el cual requiere para intervenir como autor —de esta clase de ilícitos— la calidad de funcionario público, atributo que, como se señaló no mantenía dicho acusado. Todo lo anterior conduce a concluir que no se reúnen las exigencias legales para incurrir en esta clase de ilícitos.

2º) Que, si bien, la doctrina mayoritaria, al tratarse de un delito impropio, sostiene que el particular puede ser sancionado por el delito común —hurto en este caso—, en la especie ello no es posible, por no haberse llamado a debatir durante el juicio o luego de la deliberación del tribunal, conforme a lo establecido en el artículo 341 del Código Penal sobre esta posibilidad, en especial la concurrencia de las exigencias del tipo penal.

3º) Que, consecuentemente, al no concurrir la calidad de funcionario público exigida en el tipo penal de malversación de caudales públicos, respecto del acusado Ravanal Mellado, debe dictarse absolución a su respecto.

Y, visto además lo dispuesto en los artículos 373, letra b), 384 y 385 del Código Procesal Penal, se declara que **se absuelve a Pedro Nolasco Ravanal Mellado** de las acusaciones formuladas en su contra como supuesto autor de ochenta y seis delitos consumados de malversación de caudales públicos, en carácter de reiterados, aparentemente cometidos entre los meses de octubre de 2017 y marzo de 2019 en la comuna de Talcahuano.

Acordado con el voto en contra del Ministro Sr. Dahm, quien fue del parecer de mantener la condena respecto del acusado Ravanal Mellado, por los mismos argumentos referidos en el voto disidente de la sentencia de nulidad que antecede.

Cúmplase con el artículo 468 del Código Procesal Penal.



Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama y, del voto disidente, su autor.

Regístrese y devuélvase.

Nº 122.925-2022

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., la Ministra Suplente Sra. Dobra Lusic N., y los Abogados Integrantes Sra. Pía Tavorari G., y Sr. Ricardo Abuaud D. No firma la Ministra Suplente Sra. Lusic y el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por haber concluido su período de suplencia y por estar ausente, respectivamente.

MANUEL ANTONIO VALDERRAMA
REBOLLEDO
MINISTRO
Fecha: 29/05/2023 11:35:09

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 29/05/2023 11:12:05

PIA VERENA TAVOLARI GOYCOOLEA
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 29/05/2023 11:29:27



En Santiago, a veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

